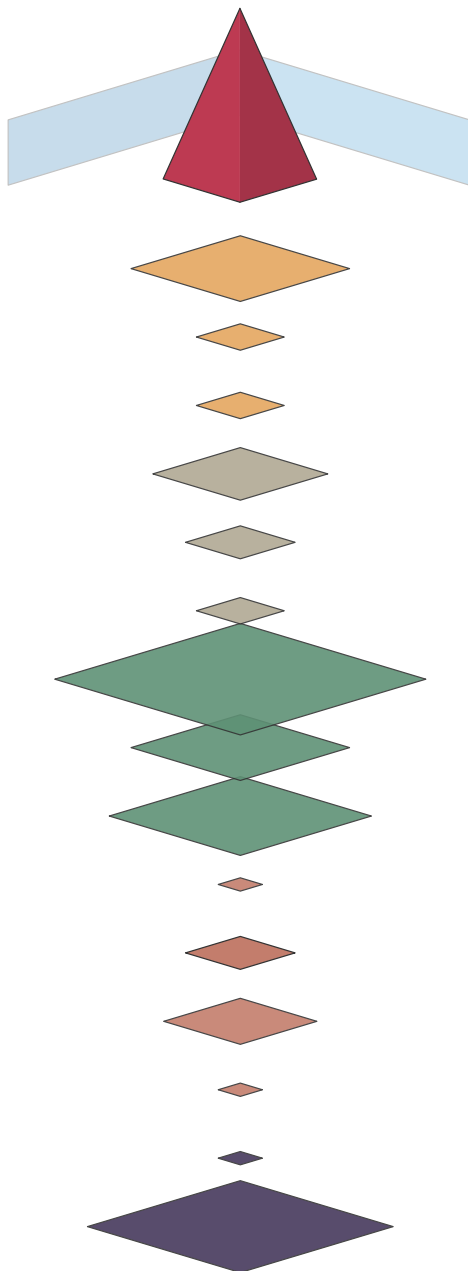




GUINEA ECUATORIAL



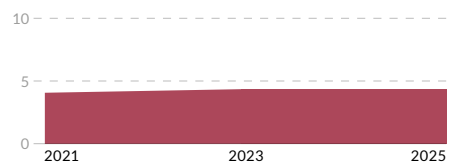
4.37 \searrow 0.01

PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

137.º de 193 países \searrow 2

44.º de 54 países africanos \searrow 2

9.º de 11 países de África Central -



MERCADOS CRIMINALES 3.53 \searrow 0.04

TRATA DE PERSONAS 5.00 \nearrow 0.50

TRÁFICO DE PERSONAS 2.00 0.00

EXTORSIÓN Y COBROS ILEGALES POR PROTECCIÓN 2.00 0.00

TRÁFICO DE ARMAS 4.00 \searrow 1.50

COMERCIO DE PRODUCTOS FALSIFICADOS 2.50 \nearrow 0.50

COMERCIO ILÍCITO DE BIENES DE CONSUMO SUJETOS A IMPUESTOS ESPECIALES 2.00 0.00

DELITOS CONTRA LA FLORA 8.50 \nearrow 0.50

DELITOS CONTRA LA FAUNA 5.00 0.00

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 6.00 0.00

COMERCIO DE HEROÍNA 1.00 \searrow 1.00

COMERCIO DE COCAÍNA 2.50 \nearrow 0.50

COMERCIO DE CANNABIS 3.50 0.00

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 1.00 \searrow 0.50

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA 1.00 \searrow 0.50

DELITOS FINANCIEROS 7.00 \nearrow 1.00



ACTORES CRIMINALES 5.20 0.00

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 1.00 0.00

REDES CRIMINALES 2.00 0.00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 9.00 0.00

ACTORES EXTRANJEROS 5.50 0.00

ACTORES DEL SECTOR PRIVADO 8.50 0.00



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos

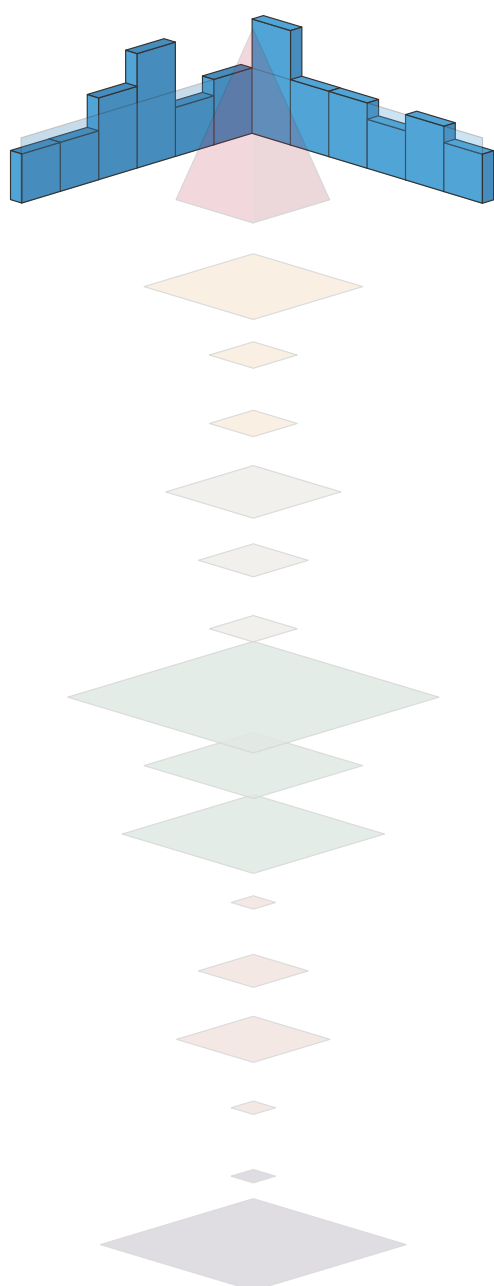


Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.



GUINEA ECUATORIAL



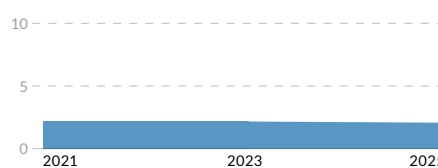
2.08 $\searrow 0.13$

PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

181.º de 193 países $\searrow 1$

49.º de 54 países africanos -

10.º de 11 países de África Central $\searrow 1$



LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	1.50	0.00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	1.50	$\searrow 0.50$
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	2.50	$\searrow 0.50$
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	3.50	$\searrow 2.00$
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	1.50	$\searrow 1.00$
CUERPOS DE SEGURIDAD	2.00	0.00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	3.50	0.00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	2.00	0.00
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	2.00	$\searrow 0.50$
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	1.50	0.00
PREVENCIÓN	2.00	0.00
ACTORES NO ESTATALES	1.50	0.00



Este proyecto ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos



Funded by
the European Union

ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Institute for Security Studies e INTERPOL, en asociación con Global Initiative Against Transnational Organized Crime.

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Guinea Ecuatorial es un país de destino y de origen para la trata de personas. Las víctimas, entre las que se encuentran ciudadanos de países como Brasil, Cuba y Etiopía, son explotadas en el servicio doméstico, la hostelería y la industria del sexo. También se explota a los ciudadanos nacionales en el extranjero, especialmente en España. Algunas ciudades y pueblos, como Malabo, Bata, Mongomo y Ebebiyin, son zonas claves. Las mujeres, los niños y las personas LGBTQI+ son especialmente vulnerables. En las redes de trata participan actores locales y extranjeros, que utilizan el reclutamiento fraudulento y la confiscación de documentos para facilitar la explotación. La corrupción, que al parecer incluye la complicidad de algunos funcionarios, agrava el problema y los documentos falsificados facilitan la trata.

El país es destino de trabajadores migrantes procedentes de África, China y Cuba, pero no hay pruebas claras de la existencia de un mercado organizado de tráfico de personas. Las investigaciones públicas sobre el tráfico son escasas y, según los expertos, su impacto social es limitado. Sin embargo, se han observado conexiones entre las redes de tráfico ilícito de personas y las de trata, en particular en lo que respecta a las víctimas de la trata con fines sexuales. Al parecer, la corrupción de las instituciones públicas, como la posible participación de funcionarios diplomáticos, facilita estas actividades. Los delitos relacionados con el tráfico ilícito parecen estar relacionados con otros mercados ilícitos más amplios de la región.

Según los informes, la extorsión y los cobros ilegales por protección están vinculados exclusivamente a los actores estatales y no hay pruebas de la participación de grupos delictivos. Preocupa la piratería marítima en el golfo de Guinea, pero ha disminuido durante el período que abarca el informe. Los grupos piratas, principalmente de Nigeria, atacan a los petroleros para robar el crudo, secuestran a las personas para pedir un rescate y cada vez operan más lejos de la costa, para que no los detecten.

TRÁFICO

Guinea Ecuatorial no ha informado de ningún caso reciente de tráfico de armas, aunque algunas fuentes extranjeras han suministrado equipo militar, lo que refuerza el gobierno autoritario y las redes criminales. Las armas suelen transitar por países intermediarios, donde se blanquean las ganancias. Los acuerdos militares no publicados del país con entidades extranjeras preocupan por la falta de transparencia. Aunque no se ha confirmado ninguna relación directa con la violencia

local, los beneficios económicos de la venta de armas se suelen blanquear en el extranjero. En este mercado, la corrupción alcanza a altos niveles del Gobierno y existen denuncias de transacciones fraudulentas en las que están implicados altos funcionarios.

Existen artículos falsificados, en particular productos farmacéuticos, aunque son pocos los casos denunciados y la información disponible es limitada. Los productos electrónicos falsificados son los bienes ilícitos más comunes en los mercados informales y su presencia ha aumentado con el tiempo. Guinea Ecuatorial no es un centro importante para el comercio ilícito de bienes de consumo sujetos a impuestos especiales, pero la ciudad portuaria de Malabo ha sido un lugar de tránsito para el contrabando de cigarrillos hacia Nigeria. Si bien los controles aduaneros suelen ser estrictos, los altos impuestos y la limitada capacidad reguladora favorecen el contrabando, como el de alcohol y el de tabaco. La corrupción de las aduanas facilita estas actividades y la débil aplicación de la ley en las fronteras hace que persista el comercio ilícito.

MEDIOAMBIENTE

Guinea Ecuatorial, que forma parte de la cuenca del Congo, se ha enfrentado a una tala ilegal persistente, que suministra principalmente madera de okoumé a China, Tailandia y Malasia. La corrupción facilita estas actividades y se suelen otorgar concesiones forestales como favores políticos. Hay actores extranjeros de Corea del Norte, China, España y Líbano, algunos de ellos presuntamente vinculados a Hezbolá, que operan de forma conjunta con las élites nacionales. A través de estas concesiones forestales, las élites utilizan empresas fantasma para diversificar sus fuentes de ingresos y afianzar aún más el control del régimen de Obiang. La respuesta del Gobierno ha sido bastante ineficaz, ya que, gracias a la corrupción, continúan la explotación y el blanqueo de los beneficios a través de las redes financieras internacionales. Guinea Ecuatorial es un lugar de origen y de tránsito para el tráfico de especies silvestres y Bata es un centro de distribución importante. Mientras que el mercado local se centra en la carne de animales silvestres, los artículos de alto valor, como las escamas de pangolín, se trafican hacia los mercados asiáticos. El país también ocupa un lugar destacado en cuanto al riesgo de la pesca ilegal, ya que sus aguas territoriales interesan a los buques extranjeros. Las redes del crimen organizado gestionan las operaciones de tráfico, que a menudo se solapan con las rutas de contrabando de madera. El tráfico agota la biodiversidad, lo que afecta al ecoturismo y a las economías locales. El mercado de Guinea Ecuatorial es más pequeño que el de los países vecinos, pero también se integra en las redes regionales de tráfico.

El mercado de los delitos contra los recursos no renovables está muy centralizado y las élites políticas y los militares controlan las actividades ilícitas. La corrupción y la débil gobernanza permiten que los actores integrados en el Estado, las entidades extranjeras y las redes criminales dominen la explotación de los recursos. Cuantificar el volumen y la frecuencia del comercio ilícito de recursos no renovables es difícil, debido a la naturaleza clandestina de estas actividades y a la falta de transparencia. La violencia está relacionada con la competencia por los sitios de extracción y la utilizan los grupos armados.

DROGAS

No hay pruebas de que exista un comercio significativo de heroína ni un consumo generalizado de esta droga y no hay datos recientes que sugieran una actividad notable en este mercado. Sin embargo, el tráfico de cocaína es bastante común, lo que indica la existencia de un mercado local, aunque el país no es un destino principal para este tráfico. La suelen traficar ciudadanos extranjeros, como nigerianos y sudafricanos. Aunque no hay vínculos confirmados entre altos funcionarios y el tráfico de cocaína, persisten los rumores al respecto, alimentados por varios incidentes recientes. El cannabis desempeña un papel importante en la economía criminal local, impulsado por unos niveles de consumo notables. La mayor parte de la droga es de producción nacional, aunque el tráfico también involucra a países como Benín, en particular en la región fronteriza con Camerún, lo que indica una dinámica local y transnacional. Entre los actores criminales involucrados se encuentran las redes organizadas nacionales y las entidades extranjeras. A pesar de estas actividades, el impacto social general del cannabis es mínimo. No hay datos recientes que indiquen un tráfico ni un consumo considerables de drogas sintéticas.

DELITOS DEPENDIENTES DE LA CIBERNÉTICA

No hay información disponible sobre la presencia de un mercado de delitos dependientes de la cibernética en Guinea Ecuatorial.

DELITOS FINANCIEROS

Los delitos financieros son omnipresentes y afectan principalmente a las élites políticas de los más altos niveles del Gobierno. Las prácticas financieras corruptas, como la malversación y el fraude, están muy extendidas y numerosos casos implican a antiguos ministros, a figuras judiciales y a funcionarios públicos. Aunque hay leyes contra los delitos financieros, los esfuerzos para combatirlos son ineficaces, debido a la corrupción sistémica. Han aumentado las estafas, como los esquemas piramidales, aunque pocas se investigan. Estas actividades delictivas se ven impulsadas por las redes del crimen organizado y la complicidad política, lo que dificulta el avance hacia la rendición de cuentas.

ACTORES CRIMINALES

El crimen organizado incluye a grupos como los 8 Machetes, que se dedican principalmente a actividades relacionadas con el robo y utilizan tácticas violentas. Estos grupos operan con estructuras de liderazgo jerárquicas y los miembros deben pagar cuotas para unirse al grupo o para abandonarlo. Aunque no se dispone de datos sobre la cantidad de grupos, las organizaciones influyen en la violencia callejera, que fluctúa según la presencia militar en zonas determinadas. No queda claro el impacto que tiene el grupo en los mercados criminales más amplios.

Varias redes criminales anónimas se dedican sobre todo al comercio local de cannabis y a los delitos financieros. No hay información detallada sobre su organización, sus niveles de violencia ni su distribución geográfica. Si bien algunos grupos pueden tener estructuras organizadas, sus actividades y sus afiliaciones son fluidas y es habitual que los jóvenes practican pequeños hurtos. No se han documentado a fondo los vínculos transnacionales ni el alcance de la influencia extranjera en estas redes, lo que pone de manifiesto importantes lagunas en los datos disponibles.

Los actores estatales desempeñan un papel central en la economía delictiva, especialmente en delitos financieros, como el soborno, la malversación de fondos y la apropiación indebida. Hay altos funcionarios y personas cercanas a la presidencia que están muy involucrados en el desvío de los recursos públicos para su beneficio personal y las entidades estatales suelen verse implicadas en escándalos. La corrupción está muy extendida a todos los niveles, desde los altos funcionarios hasta los empleados de menor rango. Las investigaciones y la retórica política contra la corrupción no conducen a reformas significativas.

Guinea Ecuatorial acoge a una gran diáspora extranjera, procedente sobre todo de Francia, Santo Tomé y Príncipe y España, aunque su papel en los mercados criminales no queda claro. Hay personas procedentes de Nigeria, Benín y Camerún que están involucradas en delitos como la trata de personas, el robo de petróleo y el tráfico de drogas y se sospecha que hay actores extranjeros del sector privado involucrados en los delitos contra la flora. Algunos ciudadanos y empresas privadas europeas, a menudo vinculados a las élites locales, son actores claves en las actividades ilícitas. También facilitan la corrupción, con la participación de profesionales, como abogados y contables, algunos de los cuales tienen su sede en Guinea Ecuatorial.

Los delincuentes del sector privado suelen utilizar industrias como la petrolera, la forestal y la aeronáutica para blanquear fondos ilícitos. La corrupción gubernamental, sobre todo en el sector petrolero, permite transacciones financieras opacas, que benefician a los actores estatales. El sector forestal es un ejemplo de corrupción sistémica, ya que las empresas madereras aprovechan impunemente las regulaciones y los derechos de las comunidades. Las pruebas también apuntan a la malversación de fondos públicos mediante

pagos a empresas privadas vinculadas a la élite política. Las investigaciones europeas, especialmente en España, han descubierto casos de lavado de dinero y de corrupción en los que están implicadas las élites. Sin embargo, la interrelación

entre el sector público y el privado, especialmente bajo la influencia de la élite gobernante, dificulta el rastreo de las actividades delictivas y de sus conexiones transnacionales.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Guinea Ecuatorial enfrenta importantes retos a la hora de combatir el crimen organizado, debido a la debilidad de su gobernanza, a la corrupción política y al predominio de la élite gobernante. A pesar de su fuerte retórica contra las actividades delictivas, como el tráfico de cannabis, la piratería y la ciberdelincuencia, los esfuerzos del Gobierno se debilitan como consecuencia de la aplicación desigual de la ley y de una corrupción muy arraigada. El sistema político está estrictamente controlado por el partido gobernante, lo que limita la oposición y la transparencia. Las evaluaciones internacionales destacan la mala gobernanza, los bajos indicadores democráticos y la debilidad del Estado de derecho, lo que refleja los obstáculos persistentes para combatir el crimen organizado y fomentar reformas eficaces. La corrupción y la impunidad están muy extendidas y los funcionarios públicos suelen estar implicados en actividades ilícitas, lo que debilita aún más la confianza de la ciudadanía. Entre las medidas para combatir la corrupción se incluyen un organismo anticorrupción independiente y una ley anticorrupción, pero la injerencia política reduce su eficacia. Si bien el nuevo Código Penal define mejor la corrupción, su aplicación es desigual. El Gobierno ha introducido sistemas de pago electrónico para reducir los riesgos de corrupción, pero su impacto es limitado. La transparencia con respecto a los presupuestos y a las adquisiciones del Gobierno es escasa y el acceso del público a la información pertinente es mínimo, lo que agrava los retos de gobernanza y la percepción de que las reformas son ineficaces.

Guinea Ecuatorial ha tomado medidas para ajustarse a las normas internacionales sobre el crimen organizado, ratificando varios convenios de Naciones Unidas y participando en iniciativas regionales de seguridad. Sin embargo, siguen existiendo lagunas, como la no ratificación de convenios claves relacionados con las drogas y la falta de aplicación de los acuerdos de extradición. A pesar de su participación en los marcos internacionales, la limitada cooperación en materia de incautación de activos dificulta la aplicación efectiva de la ley. La corrupción y los problemas de gobernanza obstaculizan la confianza en el compromiso de Guinea Ecuatorial de luchar contra el crimen organizado y los cuerpos de seguridad extranjeros han expresado su preocupación. La creciente influencia de Rusia, como el despliegue de instructores militares, complica aún más la situación.

Guinea Ecuatorial cuenta con diversas leyes contra las actividades delictivas, como las que regulan la pesca, las aguas territoriales, el tráfico de drogas, la trata de personas y la corrupción. Aun así, el marco jurídico contra el crimen organizado es débil y existen lagunas en la investigación, el procesamiento y el castigo de los delincuentes. El Código Penal del 2022 actualiza las leyes, pero no es coherente con la legislación especializada. Durante el período que abarca el informe se presentaron nuevos proyectos de ley para abordar la ciberdelincuencia y los delitos contra la flora, pero su implementación es incierta. La aplicación de la ley es desigual y muchas leyes se aplican mal y suelen proteger a los funcionarios públicos corruptos, lo que pone de relieve las dificultades del país para combatir eficazmente el crimen organizado.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El sistema judicial está muy debilitado por la corrupción, la injerencia política y la falta de unidades jurídicas especializadas en la lucha contra el crimen organizado. Los jueces suelen consultar al presidente antes de dictar sentencia y las presiones políticas debilitan la independencia judicial. La corrupción del Poder Judicial y del sistema penitenciario fomenta la impunidad de los actores del crimen organizado, mientras que las duras condiciones carcelarias, el hacinamiento y los abusos ayudan a propagar las actividades criminales. Persisten las violaciones de los derechos humanos, como la tortura y las ejecuciones arbitrarias, y las víctimas cuentan con recursos jurídicos limitados. En las zonas en las cuales la presencia del Estado es débil, los grupos delictivos imparten una justicia informal o resuelven disputas, lo cual consolida aún más su poder y su influencia. El control del Estado sobre las prisiones es endeble y las redes criminales ejercen influencia en ellas, lo que afianza aún más el crimen organizado.

Los cuerpos de seguridad se centran en el crimen organizado, como el tráfico de drogas, la trata de personas y los delitos financieros, pero enfrentan importantes retos. La corrupción de la Policía, la implicación de las élites políticas y la falta de recursos reducen la eficacia de las operaciones. La Policía está implicada en extorsiones, especialmente a migrantes, y utiliza perfiles raciales, lo que da lugar a detenciones arbitrarias en malas condiciones. Los organismos de inteligencia tienen dificultades, debido a la falta de recursos y a la corrupción sistémica, lo que limita su capacidad para combatir el

crimen organizado. Aunque el país participa en iniciativas de seguridad regionales e internacionales, la capacidad de sus cuerpos de seguridad para responder de manera eficaz se ve limitada por la injerencia política, la financiación inadecuada y la corrupción.

Guinea Ecuatorial también se enfrenta a importantes retos para garantizar la seguridad de sus fronteras, debido a su situación estratégica a lo largo de las principales rutas del tráfico y a la porosidad de sus fronteras. Tiene dificultades para controlar actividades ilícitas como la tala ilegal, el tráfico de especies silvestres y el contrabando de drogas, agravadas por la corrupción de los funcionarios que controlan las fronteras. A pesar de la participación militar y de cierta cooperación regional en materia de seguridad marítima, la piratería en el golfo de Guinea sigue siendo motivo de preocupación. La seguridad fronteriza se ve obstaculizada por la insuficiencia de las infraestructuras, la escasez de recursos y la corrupción generalizada, especialmente en el sector petrolero. Si bien se ha intentado combatir la piratería y la trata de personas, la ciberseguridad es un punto débil, eclipsada por las prioridades de la seguridad física.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Guinea Ecuatorial se está enfrentando cada vez a más control judicial por el lavado de dinero, en particular en lo que respecta a la élite política y a las ganancias del sector extractivo. Varias investigaciones se han centrado en personas cercanas a la presidencia por malversación de fondos públicos. La eficacia de las medidas para luchar contra el lavado de dinero queda limitada por la corrupción y por la escasa aplicación de la ley. El país es miembro del Grupo de Acción contra el Blanqueo de Capitales en África Central, pero no lo han evaluado en los últimos años, lo que pone de manifiesto las deficiencias en la aplicación de la ley. Las operaciones de las unidades de inteligencia financiera no están claras y no existen medidas para prevenir el lavado de dinero a través del crowdfunding o de los juegos de azar en línea.

El entorno legislativo está dominado por el partido gobernante, lo que limita la aplicación de reformas económicas significativas. El Fondo Monetario Internacional señala problemas generalizados en la aplicación de las leyes. La economía, muy dependiente del petróleo y del gas en alta mar, se encuentra estancada, debido a la caída del precio del petróleo y al agotamiento de los yacimientos. La diversificación económica y la liberalización del mercado han avanzado muy poco. La corrupción, la ineficacia burocrática y la falta de claridad de la normativa obstaculizan la inversión extranjera y debilitan el crecimiento económico. La falta de oportunidades de empleo en el sector privado limita el desarrollo de una economía más inclusiva y eficiente.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

El Gobierno ofrece un apoyo mínimo a las víctimas del crimen organizado y los actores no estatales desempeñan un papel más importante para atenderlas. Durante el período que abarca el informe, no se aprobaron los procedimientos operativos estándar definitivos para protegerlas. La plataforma de denuncia anónima y la línea telefónica de emergencia del Gobierno no funcionan, con lo cual no hay alternativas para las llamadas relacionadas con la trata de personas. Las autoridades dependen totalmente de dos oenegés para brindar refugio y atención a las víctimas adultas y a los menores. En lugar de apoyar a las víctimas, el Estado encara la criminalidad, en particular a través de campañas como la Operación Limpieza, mediante medidas punitivas, como las detenciones arbitrarias y la tortura. Persiste la preocupación por los derechos humanos y existe una actitud punitiva hacia los consumidores de drogas y las víctimas de delitos.

Guinea Ecuatorial ha desarrollado estrategias nacionales y regionales para combatir el crimen organizado, centradas especialmente en el tráfico de drogas, la trata de personas y la tala ilegal, y existe cooperación regional en materia de piratería en el golfo de Guinea. Sin embargo, estos esfuerzos se ven obstaculizados por la corrupción, la debilidad del Estado de derecho y las violaciones de los derechos humanos. Las medidas del Gobierno contra la trata de personas han sido desiguales, ha habido pocos avances en la aplicación de la normativa laboral y falta una línea telefónica operativa para denunciar los casos de trata. La participación de la comunidad es mínima y la confianza en los cuerpos de seguridad, escasa, debido al enfoque autoritario del Gobierno. Si bien existen programas de sensibilización, son excepcionales y carecen de un enfoque proactivo y basado en la comunidad, lo que debilita los esfuerzos para combatir eficazmente el crimen organizado.

Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel bastante limitado en la lucha contra el crimen organizado, debido al entorno político represivo y a las restricciones de las libertades civiles. El Gobierno controla los medios de comunicación mediante la censura, el acoso y las detenciones arbitrarias de periodistas, que se ven muy limitados por las presiones financieras y las políticas. Este clima debilita los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil para abordar cuestiones como la trata de personas y los delitos contra el medio ambiente y la corrupción del Estado y su implicación en el crimen organizado dificultan aún más la cooperación. Aunque los organismos intergubernamentales prestan asistencia técnica, su impacto es mínimo.

Este resumen ha sido financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, los hallazgos y las conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no necesariamente reflejan los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.